

7. MOVIMIENTOS CIUDADANOS AL RESCATE

SALVADOR AGUILAR, MARÍA T. BRETONES Y JAIME PASTOR

Las sociedades de la era neoliberal entraron hace ya muchos años en un período de grandes turbulencias económico-políticas y malestares sociales. Los mecanismos tradicionales de representación de intereses y formulación de demandas, empezando por los grandes partidos, han ido entrando en crisis aguda y práctica paralización (al menos desde la perspectiva de su servicio a la mayoría de la población). La crisis iniciada en 2007, económica y sistémica, ha hecho el resto, poniendo de relieve la insoslayable necesidad de encontrar nuevos caminos e instituciones para solucionar los problemas reales de la ciudadanía; y la respuesta más inmediata ha sido la aparición de vigorosos *movimientos ciudadanos* con un protagonismo creciente de la juventud.

Hace menos de un año (*El País*, 7.07.2010, p. 27), después de constatar la reacción moderada de la población ante esa crisis de 2007, pronosticábamos un cambio de tendencia. Ya Barrington Moore, uno de los mejores conocedores de estos fenómenos, advirtió que la propia lógica de la dominación de unos grupos humanos por otros explica que los primeros la den por supuesta; pero “la ausencia de objeción abierta no significa que la aceptación de las desigualdades” sea voluntaria, al contrario, se puede siempre percibir en las actitudes populares una corriente soterrada de resistencia que, dadas ciertas condiciones, estalla. En la época reciente, el cambio de tendencia y el estallido se ha iniciado en 2011 con las revueltas cívicas en Túnez y Egipto y la “Spanish revolution” del “Movimiento 15-M”, ambas formas innovadoras de respuesta (más allá de las clásicas comentadas en ese artículo) que buscan caminos nuevos.

Son, por supuesto, fenómenos de protesta fundamentalmente diferentes. Las revueltas árabes son la punta de lanza de una presión desde abajo para democratizar esas sociedades: son revoluciones democráticas que previsiblemente buscarán implantar un sistema político liberalizado que responda a las ansias de justicia social. En el caso español el movimiento parece combinar trazos no desdeñables de anti-política, en algunos aspectos similar a la que surgió en los países del Este europeo después de 1989, con, sobre todo, una determinación por acabar con las formas inaceptables que se

han instalado en las *infrademocracias* occidentales y que tanto la bushiana “guerra contra el terror” como la gestión de la crisis financiera y económica desde 2007 han llevado al límite y puesto a la vista del público. Porque estamos comprobando cómo el Estado capitalista, al menos en esta (larga) coyuntura histórica de crisis, es el mercado, mientras la sociedad civil asiste estupefacta, invitada por la élite neoliberal, a contemplar cómo se hace realidad el díctum de Margaret Thatcher: “la sociedad no existe”.

Pero los dos procesos, en el Norte de Africa y en el Estado español, comparten también cosas importantes. Ambos responden a un resorte profundo de indignación, la “economía moral” sobre la que alertó el historiador E.P. Thompson, que estalla cuando un determinado régimen político y social traspasa las líneas fundamentales (establecidas culturalmente) de aquello vivido como incompatible con la justicia social básica, la que garantiza un consenso o contrato social elemental en sociedades divididas en clases. Ambos expresan también los efectos de la crisis global sobre sectores y regiones especialmente desprotegidos. Las marcadas subidas de los precios de los alimentos básicos (en 2008 y 2010) y la cancelación de ayudas y subsidios por la “liberalización” económica de los últimos años, en el Norte de Africa, y el plan de austeridad ordenado desde Centroeuropa en el caso español, han actuado como desencadenantes finales de la indignación popular (al percibirse a sí mismos los afectados como víctimas de un sistema cleptocrático insaciable). Se parecen también, finalmente, en el novedoso formato de protesta seleccionado. Ambos casos han importado, por un proceso de difusión, las formas de la eficiente protesta masiva y directa pero no violenta que provocó, por ejemplo, la parálisis del régimen gaullista en 1968 y del régimen estalinista en las calles de Leipzig en noviembre de 1989. Y esto nos lleva a su característica distintiva de ser movimientos ciudadanos, el nuevo actor político en ascenso.

Un movimiento ciudadano es un movimiento social que se autoimpulsa desde la sociedad civil y actúa al margen de la institucionalidad política con la vocación de constituirse en actor en la esfera pública. La condición básica que lo activa es que esa estructura institucional se niega a procesar ciertas demandas de la población consideradas por la élite o inapropiadas o del todo inadmisibles. En el Occidente contemporáneo posterior a 1968, estos

movimientos han hecho acto de presencia con frecuencia creciente y exhiben varias innovaciones: se expresan mediante acciones de masas autoorganizadas y con vínculos organizativos débiles; representan los intereses de los que carecen de voz (numerosos sectores infra- o no representados de las clases populares); son espasmódicas (como parte de su estrategia, aparecen y desaparecen de la calle y de la esfera pública, careciendo por ello de portavoces estables y liderazgo claro); e introducen con su acción en esa esfera elementos de moralidad política de los que se han ido desprendiendo las *infrademocracias*. En parte, la huelga general española de 1988 presentó características similares; pero con mayor claridad han aparecido también en los movimientos franceses de 1995 (contra la globalización neoliberal) y 2006 (contra el contrato de primer empleo), así como en las protestas globales contra la Guerra de Irak de 2003.

En el caso de Túnez y Egipto, estos movimientos han impulsado sendas *revueltas cívicas*: movilizaciones ciudadanas de gran envergadura y alto riesgo que persiguen derrocar una dictadura y algún cambio socioestructural. Sus orígenes parcialmente homogéneos, sus métodos y su alta y espectacular eficacia han contagiado al núcleo inicial del 15-M español, que ha hecho frecuentes referencias explícitas al importante símbolo de la ocupación de plazas públicas y, en particular, a Tahrir. Con lo que subrayan la “compactación” de clases que podemos entrever en estos dos movimientos y su necesaria expresión en la plaza pública: unas clases bajas directamente afectadas por la gestión de la crisis y “perdedores” de la globalización; una subclase de trabajo precarizado que se originó en los años de 1980, y en particular su motor, el sector menor de 25 años que entiende que sus oportunidades vitales están en retroceso y muy lejos de su cualificación; pero también unas clases medias atemorizadas por su hundimiento en la proletarianización (algo que ya se vio en el movimiento ciudadano de la Argentina de 2001).

Los miembros de estos movimientos ciudadanos comparten –parafraseando al sociólogo Parkin- las causas profundas de la protesta: no reconocen espacio donde acomodarse, ni horizontes a los que aspirar y están, por tanto, aprendiendo a despojarse de los gestos de deferencia que le exige la misma élite global que ha consentido, e incluso alentado, la desintegración de sus

oportunidades vitales previas al tiempo que no podía contener ya el carácter cleptocrático e irracional de su dominio (véase al respecto *Inside job*). Hay pocos caminos para revertir el entuerto. Sobre todo porque se produce en una coyuntura histórica de crisis (muchas) planetarias: económico-financiera, poblacional, de sostenibilidad, de hiperdesigualdades, de los limitados avances democráticos conseguidos... Los movimientos ciudadanos que encaran este futuro, no incierto, sino extremada y peligrosamente cierto, aparecen como un actor político nuevo y, esperemos, instrumento original para revitalizar las sociedades civiles desde abajo y forzar un cambiar de rumbo.

Tal vez en 1968 se inició el tránsito no violento de un largo camino con cuyo recorrido se aprende a deshacer el hilo que une la dominación y el privilegio con la subordinación. Los vehículos tradicionales, en forma de partidos de izquierda y progresistas, sindicatos y mayorías electorales, aunque es mejor que existan, ya no sirven para eso y tendrán que ir a remolque o reinventarse, pero Tahrir, Sol, Catalunya y una ya larga lista de plazas públicas acuden al rescate.

Junio de 2011.